

AUTORIDAD DE ASESORÍA FINANCIERA Y AGENCIA FISCAL DE PUERTO RICO
(“AAFAF”)
ORDEN ADMINISTRATIVA OA-2018 – 2
2 DE ABRIL DE 2018

POR CUANTO: El 3 de mayo de 2017 el Gobierno de Puerto Rico, a través de la Junta de Supervisión Fiscal (“Junta”), presentó una solicitud de reestructuración al amparo del Título III de la Ley Pública 114-187 de 30 de junio de 2016, denominada *Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act* (“PROMESA”) ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

POR CUANTO: Desde el 28 de julio de 2017, el Gobierno de Puerto Rico y las siguientes uniones de empleados públicos: International Union, United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of America (“UAW”); Service Employees International Union (“SEIU”); American Federation of Teachers, AFL-CIO; y American Federation of State, County and Municipal Employees International Union, AFL-CIO (en conjunto, las “Uniones”),¹ han sostenido conversaciones sobre la paralización automática de litigios que provee la Sección 301(a) de PROMESA sobre las quejas, agravios, arbitrajes y litigios (los “Casos”) presentados por las Uniones bajo los procedimientos de quejas, agravios y arbitrajes dispuestos en los convenios colectivos de las respectivas Uniones, y que versen sobre hechos o conductas ocurridos con anterioridad al 3 de mayo de 2017.

POR CUANTO: El 6 de marzo de 2018, el Gobierno de Puerto Rico suscribió una estipulación (la “Estipulación”) con la American Federation of State, County and Municipal Employees International Union, AFL-CIO y la American Federation of Teachers, AFL-CIO mediante la que convino modificar parcialmente la paralización automática

¹ La referencia a las Uniones incluye a sus afiliadas locales: Servidores Públicos Unidos (“SPU”); Alianza Correccional Unida (“ACU”); Personal, Administrativo, Secretarial y de Oficina (“PASO”); y Asociación de Maestros de Puerto Rico, Local Sindical (“AMPR”).

de PROMESA sobre ciertos Casos presentados por dichas uniones, sujeto a los términos y condiciones de la Estipulación. La UAW y la SEIU no suscribieron la Estipulación, pero aceptaron seguir sus términos temporariamente. La Estipulación se incluye como anejo a esta Orden Administrativa y se hace formar parte integral de la misma.

POR CUANTO:

Para poner en vigor la Estipulación, es necesario establecer un protocolo mediante el que se examinen los Casos sujetos a la Estipulación, para identificar aquellos que continuarán paralizados bajo las disposiciones de PROMESA y los que podrán continuar los trámites procesales en que se encuentran, según los términos acordados en la Estipulación y de conformidad con las disposiciones de esta Orden Administrativa.

POR CUANTO:

La Ley Núm. 2-2017 dispone que la AAFAF es la entidad encargada de supervisar, ejecutar y administrar el plan fiscal certificado del Gobierno de Puerto Rico (el "Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico") y los otros planes fiscales certificados por la Junta (colectivamente, los "Planes Fiscales"), así como de fiscalizar que todo el Gobierno de Puerto Rico, según definido en la Ley Núm. 2-2017, cumpla con cualquier plan fiscal certificado. La AAFAF también es el ente encargado de supervisar los asuntos relacionados con la reestructuración, renegociación o ajuste de cualquier obligación existente y futura del Gobierno de Puerto Rico.

POR CUANTO:

La Ley Núm. 2-2017 también autoriza a la AAFAF a requerir de cualquier ente del Gobierno de Puerto Rico informes, datos y cualquier otra información relevante para supervisar y administrar los Planes Fiscales o para facilitar la reestructuración o ajuste de cualquier obligación del Gobierno de Puerto Rico.

POR TANTO:

La AAFAF, a nombre del Gobierno de Puerto Rico y en virtud de la Ley Núm. 2-2017, ordena a todos los

departamentos y agencias del Gobierno de Puerto Rico lo siguiente:

PRIMERO:

Aquellos departamentos y agencias que tengan empleados o funcionarios representados sindicalmente por las Uniones, deberán identificar inmediatamente todos los Casos de empleados representados por las Uniones y que hayan sido presentados en los procedimientos de quejas, agravios y arbitrajes dispuestos en los convenios colectivos de las respectivas Uniones y/o leyes estatales aplicables, incluyendo pero no limitándose a la Ley Núm. 184-2004, Ley Núm. 32-1972, Ley Núm. 8-2017 y la Ley Núm. 45-1998, que surjan de hechos o conductas con anterioridad al 3 de mayo de 2017. Disponiéndose que, independientemente de la fecha de presentación o radicación de un Caso, se identificarán todos los Casos cuya causa de acción haya ocurrido antes del 3 de mayo de 2017. Cualquier procedimiento sobre hechos o conductas ocurridos en o posterior a la fecha aquí indicada, no estará sujeto a la paralización automática de PROMESA ni a las disposiciones de la Estipulación o esta Orden Administrativa.

SEGUNDO:

Los Casos identificados en el párrafo PRIMERO de esta Orden Administrativa continuarán el curso ordinario correspondiente ante los foros donde se estén ventilando, excepto por los Casos que se identifican a continuación.

TERCERO:

De conformidad con la Estipulación, los siguientes Casos sobre hechos o conductas ocurridos antes del 3 de mayo de 2017 seguirán sujetos a la paralización automática de PROMESA y no podrán continuar el curso correspondiente ante los foros donde se estén ventilando:

- a) Aquellos procedimientos que impugnen la constitucionalidad de cualquier ley esencial para la implementación del Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico;
- b) Aquellos procedimientos cuyo remedio final impida o sea inconsistente con cualquier ley esencial para

la implementación del Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico; o

- c) Aquellos Casos en los que se solicite algún remedio interdictal (*injunction*) que impida o contravenga la implementación de cualquier política pública del Gobierno de Puerto Rico o las facultades administrativas de los departamentos y agencias. La paralización aquí descrita no aplicará a remedios interdictales cuyo objetivo sea la reinstalación de empleados o funcionarios públicos.

Para propósitos de esta Orden Administrativa las leyes esenciales para la implementación del Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico son la Ley Núm. 2-2017, Ley Núm. 3-2017, Ley Núm. 5-2017, Ley Núm. 8-2017, Ley Núm. 26-2017 y la Ley Núm. 66-2016, según sean enmendadas de tiempo en tiempo, o cualquier otra ley anterior o posterior a la aprobación de la Estipulación o de esta Orden Administrativa que también sea esencial para la implementación del Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico.

Solo para fines de lo dispuesto en esta Orden Administrativa, lo indicado en este párrafo TERCERO se conocerá como la "excepción automática".


Todo departamento y agencia que identifique un Caso que cualifique bajo la excepción automática descrita en el párrafo TERCERO de esta Orden Administrativa, informará inmediatamente de la paralización del litigio al foro competente y a la unión que representa al empleado agraviado. De igual manera, lo anterior deberá remitirse inmediatamente a la AAFAF a la dirección de correo electrónico: estipulacionuniones@aafaf.pr.gov, utilizando el Formulario de Notificación descrito en el párrafo CUARTO de esta Orden Administrativa ("Formulario de Notificación").

CUARTO:

De conformidad con la Estipulación, los Casos sobre hechos o conductas ocurridos antes del 3 de mayo de 2017 y que afecten el Plan Fiscal del Gobierno de Puerto

Rico estarán sujetos a la paralización automática de PROMESA, luego de que la AAFAF notifique a las Uniones, agencias y departamentos que esos Casos afectan el Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico.

El procedimiento para notificar lo anterior a las respectivas Uniones será el siguiente.

- 
- a) Cada departamento o agencia que tenga empleados o funcionarios representados por las Uniones, deberá notificar a la AAFAF, en un término no mayor de 30 días calendario contados desde la aprobación de esta Orden Administrativa, aquellos Casos identificados que afecten el Plan Fiscal del Gobierno Puerto Rico, conforme a los criterios establecidos en el párrafo QUINTO de esta Orden Administrativa.
 - b) La notificación a la AAFAF se hará cumplimentando el Formulario de Notificación que se incluye como anejo a esta Orden Administrativa y se hace formar parte integral de la misma. Todo Formulario de Notificación se enviará a la siguiente dirección de correo electrónico: estipulacionuniones@aafaf.pr.gov.
 - c) La AAFAF evaluará el Formulario de Notificación e informará a las respectivas Uniones, agencias y departamentos de los Casos que afectan el Plan Fiscal del Gobierno Puerto Rico.
 - d) De la AAFAF concluir que algún Caso no afecta el Plan Fiscal del Gobierno Puerto Rico, así lo informará al departamento o agencia que le refirió el Formulario de Notificación correspondiente. Esta notificación se hará a la persona contacto que se haya designado en el Formulario de Notificación.
 - e) Los departamentos y agencias continuarán con el trámite del Caso correspondiente hasta tanto reciban una notificación de la AAFAF ordenándoles que informen al foro competente que el Caso está paralizado conforme a la Estipulación.

Solo para fines de lo dispuesto en esta Orden Administrativa, lo indicado en este párrafo CUARTO se conocerá como la "excepción por notificación".

QUINTO:

Sin ser taxativo, para identificar un Caso que cualifique bajo la excepción por notificación, las agencias y departamentos deberán considerar los siguientes criterios generales al momento de identificar quejas, agravios, arbitrajes o litigios que afecten el Plan Fiscal del Gobierno Puerto Rico:

- a) Casos que impugnen la relocalización geográfica o de oficina o el movimiento de puesto de empleados dentro de una misma agencia o, departamento, o entre distintos departamentos, agencias, corporaciones públicas e instrumentalidades públicas.
- b) Casos que impugnen la reclasificación de un empleado de transitorio o temporero a regular o permanente.
- c) Casos que afecten a una clase de empleados o que afecten a 5 o más empleados.
- d) Casos que en que la exposición monetaria del departamento o agencia en cuestión supere los \$200,000.

No obstante, cada departamento o agencia deberá identificar criterios específicos aplicables a cada entidad pública y que afecten programas importantes de política pública del Gobierno de Puerto Rico. En el Formulario de Notificación se informarán los criterios específicos y/o generales que utilizó la entidad gubernamental para identificar los Casos que afecten el Plan Fiscal del Gobierno Puerto Rico.

SEXTO:


Los Casos sobre hechos o conductas ocurridos antes del 3 de mayo de 2017 y que involucren solamente amonestaciones disciplinarias, suspensiones disciplinarias o despidos o destituciones disciplinarias (incluyendo aquellos despidos o destituciones por

desempeño no adecuado o insuficiente), no estarán sujetos a la paralización automática de PROMESA, a la “excepción automática” ni a la “excepción por notificación” descritas en esta Orden Administrativa, y podrán continuar con los trámites procesales ante los foros correspondientes.

SÉPTIMO:

Esta Orden Administrativa tiene vigencia inmediata y deroga cualquier otra orden, comunicación escrita o instrucción anterior en todo cuanto sea incompatible con lo dispuesto en la presente Orden Administrativa.

En testimonio de lo cual, firmo la presente en San Juan, Puerto Rico, hoy 2 de abril de 2018.



Gerardo José Portela Franco
Director Ejecutivo

UNITED STATES DISTRICT COURT
DISTRICT OF PUERTO RICO

-----X
In re:

THE FINANCIAL OVERSIGHT AND
MANAGEMENT BOARD FOR PUERTO RICO,

as representative of

THE COMMONWEALTH OF PUERTO RICO, *et al.*,

Debtors.¹

PROMESA
Title III

No. 17 BK 3283-LTS

(Jointly Administered)

-----X
In re:

THE FINANCIAL OVERSIGHT AND
MANAGEMENT BOARD FOR PUERTO RICO,

as representative of

THE COMMONWEALTH OF PUERTO RICO

Debtor.

PROMESA
Title III

No. 17 BK 3283-LTS

**This Stipulation relates only to
the Commonwealth and shall
only be filed in the lead Case No.
17 BK 3283-LTS.**

-----X
**STIPULATION BETWEEN
THE COMMONWEALTH OF PUERTO RICO AND CBA COUNTERPARTIES
REGARDING CERTAIN GRIEVANCE AND ARBITRATION PROCEDURES**

This stipulation (the “Stipulation”) is made as of March 6, 2018, by and between the
Commonwealth of Puerto Rico (the “Commonwealth”) and the American Federation of Teachers,

¹ The Debtors in these Title III Cases, along with each Debtor’s respective Title III case number and the last four (4) digits of each Debtor’s federal tax identification number, as applicable, are the (i) Commonwealth of Puerto Rico (Bankruptcy Case No. 17 BK 3283-LTS) (Last Four Digits of Federal Tax ID: 3481); (ii) Puerto Rico Sales Tax Financing Corporation (“COFINA”) (Bankruptcy Case No. 17 BK 3284-LTS) (Last Four Digits of Federal Tax ID: 8474); (iii) Puerto Rico Highways and Transportation Authority (“HTA”) (Bankruptcy Case No. 17 BK 3567-LTS) (Last Four Digits of Federal Tax ID: 3808); (iv) Employees Retirement System of the Government of the Commonwealth of Puerto Rico (“ERS”) (Bankruptcy Case No. 17 BK 3566-LTS) (Last Four Digits of Federal Tax ID: 9686); and (v) Puerto Rico Electric Power Authority (“PREPA”) (Bankruptcy Case No. 17 BK 4780-LTS) (Last Four Digits of Federal Tax ID: 3747). (Title III case numbers are listed as Bankruptcy Case numbers due to software limitations).

AFL-CIO and the American Federation of State, County and Municipal Employees, on behalf of themselves and their local affiliates in Puerto Rico (collectively, "CBA Counterparties").²

RECITALS

WHEREAS, on May 3, 2017, the Commonwealth, by and through the Oversight Board, as the Commonwealth's representative pursuant to PROMESA section 315(b), filed a petition with the United States District Court for the District of Puerto Rico (the "District Court") under title III of PROMESA (the "Title III Case");

WHEREAS, since July 28, 2017, the Commonwealth and the CBA Counterparties have been engaged in discussions regarding modifying the automatic stay under Bankruptcy Code sections 362(a) and 922(a), made applicable to the Title III Case by PROMESA section 301(a) (the "Title III Stay") with respect to grievances and arbitrations arising from prepetition conduct brought under the grievance and arbitration procedures in collective bargaining agreements between the Commonwealth and the CBA Counterparties, or under applicable statutes;

WHEREAS, the Commonwealth believes grievances and arbitrations arising from prepetition conduct are subject to the Title III Stay, and the CBA Counterparties do not, by this Stipulation, concede the applicability of the Title III Stay to such grievances and arbitrations; and

WHEREAS, the Commonwealth and the CBA Counterparties, without conceding the applicability of the Title III Stay, have agreed to modify the Title III Stay as set forth herein.

NOW THEREFORE, IT IS HEREBY STIPULATED AND AGREED, by and among the Commonwealth and the CBA Counterparties, through their counsel, each of whom represent and warrant they possess the requisite authority to bind the respective parties hereto, as follows:

² The Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico (the "Oversight Board"), as the Debtors' representative pursuant to section 315(b) of the *Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act* ("PROMESA"), has authorized the Puerto Rico Fiscal Agency and Financial Advisory Authority ("AAFAF") to enter into this Stipulation on behalf of the Commonwealth.

1. Subject to the terms herein, the Title III Stay is hereby modified solely to the limited extent necessary to permit matters arising from prepetition conduct brought under the grievance and arbitration procedures in collective bargaining agreements between the Commonwealth and the CBA Counterparties, or under applicable statutes, including but not limited to Law 184-2004, Law 32-1972, Law 8-2017, and Act 45-1998 (collectively, the “Prepetition Actions”) to proceed through the grievance handling process and to arbitration, or similar administrative process in the case of actions under applicable statutes, through final resolution, including any appeal rights parties may have (a “Disposition”) whether it is an award (the “Award”), administrative decision (“Decision”), judicial decision (“Judgment”), or settlement. To the extent that a Disposition of a Prepetition Action provides for equitable relief, including reinstatement or reclassification, it shall not be subject to any challenge based on the application of the automatic stay.

2. The Commonwealth and the CBA Counterparties have discussed the potential for certain grievances, arbitrations, or similar processes that may affect the fiscal plan for the Commonwealth (the “Fiscal Plan”) or any of the cases that have been commenced under Title III of PROMESA in the District Court (referred to herein as the “Title III Cases”). The Commonwealth and the CBA Counterparties agree that if the Commonwealth believes that a Prepetition Action affects the Fiscal Plan, the Commonwealth, through AAFAF by its counsel, may send a notice to the appropriate CBA Counterparty, by its counsel, identifying the Prepetition Action and providing a brief summary of the manner in which the Commonwealth believes the Fiscal Plan is affected. Upon receipt of a notice from the Commonwealth pursuant to the preceding sentence, the grievance or arbitration or similar process shall be stayed and the affected CBA Counterparty may file a motion for relief from the Title III Stay in accordance with the Case Management Procedures, and the grievance or arbitration or similar process shall not proceed until

the District Court hears such motion, which the parties agree shall be heard on an urgent basis if the District Court consents.

3. Notwithstanding the foregoing, the Commonwealth believes that the following categories of Prepetition Actions would have an impact on the Fiscal Plan or the Title III Cases and such actions shall continue to be subject to the Title III Stay (subject to the CBA Counterparties' right to file a motion for relief from the Title III Stay for such actions in accordance with the protocol set forth in the *Third Amended Notice, Case Management and Administrative Procedures* [ECF No. 1512-1] (the "Case Management Procedures")): (i) Prepetition Actions that challenge the constitutionality, or where the remedy would impede or be inconsistent with the implementation, of any Commonwealth statute that is essential for the Fiscal Plan to succeed, including, but not limited to: Act 2-2017 (Act to delegate to AAFAF the power to revise matters including, but not limited to, agreements, transactions, and regulations of the agencies and instrumentalities of the Government of Puerto Rico), Act 3-2017 (Act to respond to the Economic, Fiscal and Budgetary Crisis and to Guarantee the Functioning of the Government of Puerto Rico); Act 8-2017 (Act for the Administration and Transformation of the Human Resources of the Government of Puerto Rico); Act 26-2017 (Act to Comply with the Fiscal Plan); and Act 66-2014 (Special Act for the Fiscal and Operational Sustainability of the Government of Puerto Rico), which was ratified and amended by Act 3-2017 (hereinafter individually and collectively the "Commonwealth Statutes"); all of which the Commonwealth asserts (without prejudice to the CBA Counterparties) left without effect or superseded some of the provisions of the collective bargaining agreements of the CBA Counterparties, as well as any other Commonwealth statute, regulation, policy, or practice that contravene or are inconsistent with the provisions of such collective bargaining agreements; and (ii) Prepetition Actions that seek injunctive relief that would thwart the implementation of public policy or the administrative rights of the Commonwealth's

agencies other than reinstatement. The parties further agree that any Prepetition Actions solely involving disciplinary discharge (including but not limited to any disciplinary discharge for unsatisfactory performance) or other types of discipline of a Commonwealth employee shall not be subject to the Title III Stay. The Commonwealth agrees to meet and confer with the CBA Counterparties from time to time with respect to Prepetition Actions that continue to be subject to the Title III Stay.

4. The Commonwealth and the CBA Counterparties agree that the Commonwealth's failure to notify the CBA Counterparties does not waive the Commonwealth's rights to challenge the grievance, arbitration, or similar process and to claim that any Award or settlement or other Disposition should not be enforced because it affects the Fiscal Plan, including, without limitation, the right to (i) challenge the jurisdiction of the arbitrator or other forum, (ii) defend the grievance on the merits, (iii) defend against the grievance as a violation of the Fiscal Plan or PROMESA, (iv) appeal a determination of the arbitration or other forum, and (v) seek relief from the District Court.

5. To the extent that any Disposition of a Prepetition Action includes a liquidated damage claim amount (a "Liquidated Amount"), such Liquidated Amount shall not be collected from the Commonwealth but shall be treated as a liquidated claim under a plan of adjustment for the Commonwealth (a "Plan") and/or any cure process established under such Plan or under section 365(b) of the Bankruptcy Code, except to the extent that the Commonwealth chooses to pay or agree to a payment arrangement for such Liquidated Amount, subject to the Commonwealth's and the CBA Counterparties' rights regarding the classification and treatment of any such liquidated claim. Absent agreement of the Commonwealth to make such payment or payment arrangement (which shall be reflected in a communication from counsel for the Oversight Board and AAFAF), no steps shall be taken by the CBA Counterparties, any individual union, any

affiliate local union, any grievant, or any member of any union to enforce any liquidated amount except through the claims resolution process to be undertaken in the Title III Case. Without limitation, the foregoing also applies to any grievances that raise contractual issues that affect labor costs (such as grievances that challenge layoffs, seek reinstatement of employees in other than solely disciplinary cases, or seek retroactive adjustments in wage rates). Absent the express written consent of the Commonwealth (which shall be reflected in a communication from counsel for the Oversight Board and AAFAF), any such adjustments affecting labor costs, including retroactive (but not prospective) wage adjustments, will be deemed a claim and subject to the claims resolution process to be undertaken in the Title III Case.

6. Nothing contained in this Stipulation shall operate as a waiver or modification of the Title III Stay so as to permit the prosecution against the Commonwealth or any of the other Title III Debtors of any claim or claims by anyone other than the CBA Counterparties as provided for herein. The Commonwealth and the CBA Counterparties preserve all rights and defenses, including any procedural or substantive arbitrability defense, that the Commonwealth and CBA Counterparties may have in any Prepetition Action covered under this Stipulation. The Commonwealth and CBA Counterparties also reserve all rights, including, but not limited to, the right to challenge the jurisdiction of any matter. Without limiting the foregoing, and notwithstanding the provisions of paragraphs 1-5, the Commonwealth reserves the right to set aside, defend against any action to enforce, or otherwise challenge any Award or Decision that, individually or collectively with other Awards or Decisions, is alleged to (i) violate any applicable Puerto Rico or Federal statute or resolution, including but not limited to PROMESA and the Commonwealth Statutes, or (ii) violate the Fiscal Plan. The CBA Counterparties reserve all rights to oppose any such action to set aside, challenge or defend against enforcement of any such Award or Decision and the ability to challenge any grievance that, individually or collectively with other

11. This Stipulation shall be construed and interpreted in accordance with the laws of Puerto Rico. For purposes of construing this Stipulation, neither of the parties shall be deemed to have been the drafter of the Stipulation.

12. Electronic copies of signatures on this Stipulation are acceptable, and an electronic copy of a signature on this Stipulation is deemed an original. This Stipulation may be executed in counterparts, each of which is deemed an original, but when taken together constitute one and the same document.

13. This Stipulation may not be modified other than by a signed writing executed by the parties hereto.

14. The District Court shall retain jurisdiction to hear any matters or disputes arising from or relating to this Stipulation.

15. This Stipulation shall be immediately effective and enforceable upon entry of an order of the District Court approving the terms hereof.

Remainder of Page Intentionally Left Blank

IN WITNESS WHEREOF and in agreement herewith, by and through their counsel, the parties have executed and delivered this Stipulation as of the date first set forth above.

/s/ Peter Friedman

John Rapisardi
Suzanne Uhland
Peter Friedman
Diana M. Perez
(Admitted *Pro Hac Vice*)
O'MELVENY & MYERS LLP
7 Times Square
New York, NY 10036
Tel: (212) 326-2000
Fax: (212) 326-2061

*Attorneys for the Puerto Rico Fiscal Agency
and Financial Advisory Authority*

/s/ Mohammad S. Yassin

Mohammad S. Yassin
USDC-PR Bar No. 302909
PUERTO RICO FISCAL AGENCY AND
FINANCIAL ADVISORY AUTHORITY
Robert Sánchez Vilella (Minillas)
Government Center
De Diego Avenue, Stop 22
San Juan, Puerto Rico 00907
Tel: (787) 722-2525
Fax: (787) 721-1443

Chief Legal & Regulatory Officer

/s/ José Luis Barrios-Ramos

José Luis Barrios-Ramos, Esq.
McLeary Ave., Suite #303
San Juan, Puerto Rico 00936-8006
Tel.: (787) 593-6641
Barrios.jl@outlook.com

and

/s/ Curtis C. Mechling

Curtis C. Mechling
Sherry J. Millman
Stroock & Stroock & Lavan LLP
180 Maiden Lane, New York, NY 10038
(212) 806-5434
smillman@stroock.com

*For American Federation of Teachers,
AFL-CIO, as authorized agent for the
Asociación de Maestros de Puerto
Rico-Local Sindical*

/s/ Sharon L. Levine

Sharon L. Levine
Dipesh Patel
Saul Ewing LLP
1037 Raymond Blvd.
Suite 1520
Newark, NJ 07102
(973) 286-6713
slevine@saul.com

*For the American Federation of State,
County and Municipal Employees*

Judith Rivlin
Teague P. Paterson
Matthew S. Blumin
American Federation of State, County and
Municipal Employees
1101 17th Street NW, Suite 900
Washington, DC 20011
(202) 775-5900

*For the American Federation of State,
County and Municipal Employees*

AUTORIDAD DE ASESORÍA FINANCIERA Y AGENCIA FISCAL DE PUERTO RICO
(“AAFAF”)
ORDEN ADMINISTRATIVA OA-2018-2
FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN

Instrucciones: Este Formulario de Notificación (“Formulario”) de aquellos procedimientos, quejas, agravios, arbitrajes o litigios (en adelante, el “Caso”) que les aplique la *Excepción Automática* o *Excepción por Notificación*, según se detalla en la Orden Administrativa 2018-02 (“Orden Administrativa”), deberá ser enviado a la siguiente dirección de correo electrónico: estipulacionuniones@aafaf.pr.gov, bajo los términos esbozados en la Orden Administrativa. Toda duda podrá ser consultada mediante el correo electrónico aquí indicado. De necesitar espacio adicional para responder, puede contestar en un documento separado y adjuntarlo a este formulario.

Identifique: Excepción automática Excepción por notificación

1) Nombre de la agencia o departamento (en adelante, la “Entidad Pública”) que cumple este Formulario:

2) Nombre o epígrafe del Caso:

3) Número de radicación del Caso otorgado por el foro donde se ventila el mismo:

4) Fecha en que se presentó o radicó el Caso:

5) Foro donde se ventila el Caso:

6) Descripción de la causa de acción del Caso (por ejemplo, traslado, despido o destitución, etc.):

7) Fecha en que ocurrió el hecho o conducta que dio paso a la presentación del Caso
(i.e. fecha de la causa de acción):

8) Resumen del Caso (incluir relato breve de hechos fácticos y estado procesal):

9) Explicación breve de por qué el Caso está paralizado bajo la excepción automática,
según descrita en esta Orden: *(No aplica a Casos que cualifiquen bajo la excepción por
notificación, según descrita en la Orden Administrativa)*

10) Explicación breve de cómo el Caso afecta el Plan Fiscal Certificado del Gobierno
de Puerto Rico:
*(No aplica a Casos que cualifiquen bajo la excepción automática, según descrita en la Orden
Administrativa)*

